

Harvey F. Kline. *State Building and Conflict Resolution in Colombia, 1986-1994*. Tuscaloosa/London: The University of Alabama Press 1999. 240 paginas.

Últimamente el conflicto interno de Colombia llama la atención de reputados politólogos norteamericanos que anteriormente se habiandedicado a la investigación de la democracia más estable de AméricaLatina, cuyos pilares son los dos partidos políticos centristas, el ejercicio militar y los gremios económicos. Harvey F. Kline es uno de ellos, pero a diferencia de otros, en sus textos siempre ha prevalecido la preocupación por las deficiencias del sistema político respecto a los derechos humanos, la policía y la justicia. Su ultimo estudio, titulado *State Building and Conflict Resolution in Colombia, 1986-1994*, se centra en la ingobernabilidad colombiana. Ello resulta de la incapacidad y escasa voluntad de la clase dirigente de resolver los conflictos del país. Las elites han construido un Estado que sirve para proteger a particulares, pero no se ocupa del bien común. Por un lado, este Estado produce “ganancias políticas” para los que están incluidos en las redes clientelitas, por el otro, el mismo Estado es incapaz de romper con la tradición violenta del país. En efecto, la justicia privada es un medio de todos los que no se sienten suficientemente representados por las instituciones oficiales.

Kline comenta que hoy en día es sumamente difícil corregir los “pecados de los papas”. Lo que hace complicada una solución pacífica es la diversidad de la violencia y la necesidad de resolver distintos conflictos simultáneamente. Los principales actores armados, con quienes los gobiernos nacionales deben negociar, son los grupos guerrilleros, los narcotraficantes y los paramilitares: “The goals of the guerrilla groups were political - to change the economic, social, and political systems. The goals of the drug dealers were economic - simply to be left alone so that they could make money. The paramilitary squads always had the goal of protecting economic groups changed from ranchers and farmers producing legal goods to drug dealers.” (Pág. 29) Constata Kline que la administración Virgilio Barco (1986-1990) al principio no se dio cuenta del problema Paramilitar y tampoco tenía un plan viable para afrontarlo. La situación fue de especial gravedad en las zonas de colonización de Urabá y Magdalena Medio. También la “guerra sucia” contra los líderes civiles de la oposición en las ciudades requería una solución rápida. Cuestiona la indiferencia gubernamental partiendo de la tesis de que el paramilitarismo fue una consecuencia de la actividad guerrillera: “By this time the government needed to realize that the paramilitary sickness needed its own therapy.” (Pág. 76) Tan solo en 1989 el gobierno empezó a considerar las causas, el origen, los centros regionales y la estructura jerárquica de estos actores violentos con el fin de diseñar una estrategia para afrontarlos. No obstante, ni los jueces locales, ni los militares y policías tenían muchas ganas de implementar las decisiones tomadas en Bogotá. Al problema paramilitar se sumó el del narcotráfico que por mucho tiempo había pasado inadvertido por los políticos nacionales. Ellos toleraron las actividades de los capos de la droga -si bien disconformes con la ley- aceptadas en influyentes sectores de la sociedad. La administración Barco endureció su postura cada vez que una persona

importante de la vida pública era asesinada por orden de los poderosos carteles de la droga. Al mismo tiempo el gobierno estaba en contacto con emisarios de Pablo Escobar para evaluar los términos de una eventual salida negociada de la actividad ilegal así como la guerra contra el Estado y el terrorismo contra la población civil. En estos contactos secretos e informales, los narcotraficantes insistieron en la no-extradición (hacia EE.UU.) y la no-confiscación de sus propiedades. Sin embargo, el gobierno no aceptó los términos para la “rendición” de los “Narcos”. En cuanto a las negociaciones con la guerrilla, concluye Kline, que la administración Barco tuvo un gran éxito con la re-integración en la vida política civil del M-19, el grupo menos ideológico guerrillero, y el EPL, grupo maoísta de importancia regional. No obstante, cuando las FARC reanudaron su lucha armada a raíz de la campaña de extinción de su “brazo político”, el partido Unión Patriótica, los alcances de gobernabilidad logrados tras la desmovilización del M-19 y del EPL sufrieron un grave revés. Además, la aparente ambigüedad gubernamental frente al paramilitarismo fue un obstáculo para cualquier futura negociación con los restantes guerrilleros.

A primera vista, el gobierno de Gaviria (1990-1994) que ofreció bajas penas a los narcoterroristas y paramilitares a cambio de la desmovilización fue mas exitoso que el de Barco. Pero, mirándolo bien, el paramilitarismo creció también durante la administración Gaviria y, además, se vinculó cada vez mas al narcotráfico. La situación solamente se calmó cuando el “Bloque de Búsqueda” logró asesinar a Escobar quien había burlado a las instituciones estatales tras salir de su cárcel de lujo como si no hubiera sido custodiada. Gaviria fue aun menos exitoso en la búsqueda de una salida negociada de la guerra con los restantes guerrilleros. Kline afirma que fue un grave error no hacer todo lo posible por integrar a las FARC en la Constituyente de 1991. Aparte de la carencia de voluntad de la administración Gaviria por ceder mas poder a grupos políticos “terceristas”, Kline menciona otros factores que complicaron el acercamiento entre el Estado y la guerrilla más antigua del continente: las diferencias de ver los problemas, la creencia de algunos lideres en ambas partes de poder ganar la guerra militarmente, así como la heterogeneidad de los propósitos, la independencia económica de la guerrilla y, finalmente, la carencia de propósitos aceptables para ambos lados. Así pues tanto el gobierno como la guerrilla dejaron pasar un “momento histórico”. Es irónico que los constituyentes codificaron muchos derechos que las FARC y el ELN reclamaban en nombre del “pueblo”. Ello tuvo por consecuencia a que la lucha armada perdiera cada vez más su legitimidad política, mientras que la guerrilla seguía aumentando las precondiciones para su desmovilización. En suma, Gaviria tampoco logró establecer circunstancias favorables a una paz duradera mediante la democratización del sistema político.

El libro de Kline es un valioso análisis de los intentos estatales de negociar con los demás actores armados del país, situación que afecta al pueblo colombiano. De todas las razones enumeradas por Kline para los frecuentes fracasos y raros éxitos, la más convincente es la falta de coherencia conceptual dentro de las mismas instituciones publicas. Pero, no solamente la clase dirigente esta dividida en cuanto a como alcanzar la paz, sino también todo el entorno social del país. En particular, este estudio es uno de los primeros que llama la atención sobre la importancia

histórica del paramilitarismo y que trata de conceptualizarlo dentro de un esquema global político. No obstante, es de lamentar que Kline no cuestione las negociaciones con los paras y los narcotraficantes, ya que -según su propio modo de ver- estos grupos no tienen un concepto explícito político. Según mi punto de vista, el interés económico de particulares nunca justifica el uso de la violencia, y por tal motivo tampoco se puede negociar con estos grupos criminales. Otro factor que merecería ser aclarado es el papel de los EE.UU. en lo referente al diseño de la política antidroga y antisubversiva. Este país sigue siendo uno de los actores mas importantes para determinar el grado de ilegalidad y los términos del law enforcement, y a menudo las exigencias norteamericanas no corresponden con lo que Colombia requiere para salir de la pesadilla. Al fin y al cabo, cabe señalar que Kline desconoce algunas publicaciones centrales en torno a la temática de su libro: de Darío Villamizar sobre el M-19 y las negociaciones con el Estado, de Ciro Krauthausen y Luis Fernando Sarmiento sobre el mecanismo de los mercados ilegales, de Marco Palacios sobre la relación de la población colombiana con el estado tras la historia, y de Daniel Pecaut sobre la postura de las elites nacionales con respecto al uso de la violencia. Estas objeciones, eso sí, no perjudican la importante contribución a la temática que hace Kline.

Thomas Fischer